LOS JUECES OFICIALES REALES DE LA REAL CAJA DE SAN LUIS POTOSÍ

Alfonso MARTÍNEZ ROSALES *

Los lugares, villas, pueblos y ciudades de México sin asiento precortesiano conocido poseen un marco menor de su historia que el de aquellos que lo tuvieron. Tal es el caso de la ciudad de San Luis Potosí, más notable aún porque fue fundada a fines del siglo XVI (1592), cuando prácticamente todos y todo tenían su lugar en el núcleo vital de Nueva España.

Pero lo que pudiera parecer una desventaja, historiográficamente hablando, resulta ser una ventaja de consideración, pues el marco histórico de la ciudad y su rostro artístico se nos ofrecen muy asequibles en cuatro cómodos siglos. Sin embargo, siempre es necesario explorar la calidad de los cimientos de su sociedad, especialmente jurídicos, que al fin y al cabo, como principios de derecho, generaron la actual.

En la sociedad potosina del virreinato destacaron varios cuerpos de personajes que desempeñaron empleos de mucho peso. Conocemos, entre otras, la nómina de párrocos de la ciudad,¹ de los alcaldes mayores,² de los comisarios de la inquisición,³ y de los moradores del convento del Carmen.⁴ Y ahora presentamos una primera nómina de los jueces oficiales reales —tesoreros y contadores— de la Real Caja, una de las más ricas en su época de bonanza de toda la Nueva España.

* Profesor-investigador de El Colegio de México.

¹ Velázquez, Primo Feliciano, *Colección de documentos para la historia de San Luis*. San Luis Potosí, México, 1937, vol. II, pp. 417-420.

² Velázquez, P. F., *Historia de San Luis Potosí*, San Luis Potosí, México, 1982, vol. II, pp. 627-628.

³ Martínez Rosales, Alfonso, "Los comisarios de la inquisición en la ciudad de San Luis Potosí", *Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano (1983)*, México, UNAM, pp. 426-429.

⁴ Martínez Rosales, A., *El gran teatro de un pequeño mundo*. El Carmen de San Luis Potosí, México, El Colegio de México, 1985, pp. 341-346.

La dispersión de las fuentes de información histórica, especialmente jurídica, es una desventaja cotidiana para el investigador que se vuelve trágica cuando se enfrenta a las desapariciones, mutilaciones o extinciones. Mas todavía si su asunto o tema trata de la época del virreinato. Y sobre todo si su interés apunta hacia una institución que dejó de existir en 1821, al mismo tiempo que la gobernación española en México. Es el caso de la Real Caja de San Luis Potosí.

Una pregunta elemental, planteada hace ya muchos años —todavía sin respuesta— es ¿dónde quedó o cómo acabó su archivo? Sabrá Dios. Pero la paciencia del investigador prescribe. Ha sido necesario buscar y rebuscar en San Luis Potosí, en otros sitios de México y, naturalmente, trasponer el mar. Atando cabos, imaginando, preguntando, suponiendo, etcétera, hemos logrado reunir un respetable volumen de la información dispersa. Ahora, con satisfacción, podemos señalar con certidumbre dónde se encuentran las piezas que pueden configurar el “perfil ideal” del archivo de la Real Caja de San Luis Potosí.

Creemos que en este caso se justifica, más que en otros, aludir a las fuentes: Archivo de Simancas, Valladolid de España (Archivo de la Corona de Castilla); Archivo General de Indias, Sevilla; Archivo General de la Nación, México; y Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, fundamentalmente. Otra vez la aventura humana de la caza y la recolección.

Es usual en el estudio de la historia de las obras de arte de México, especialmente la arquitectura del virreinato, olvidar que son muchas veces monumentos históricos a los que dio vida otro monumento, pero jurídico, ante los cuales cabe tanto la emoción como la reflexión. Es decir que son obras de creación del talento artístico y del jurídico. Un caso ejemplar sobreviviente del arte virreinal novohispano es la Real Caja de San Luis Potosí, en que la historia permite descubrir la urdimbre jurídica que le dio vida social y forma bella y majestuosa.

Acerca de dicho monumento histórico, artístico y jurídico, nos ocupamos ahora —aunque poco— de las personas que encarnaron durante dos siglos la personalidad de jueces oficiales reales.

Las bases jurídicas de la Real Caja de San Luis Potosí, que conocemos hasta hoy sólo por referencia, fueron las reales cédulas que trajo personalmente de España, hacia 1626, el alcalde mayor de San Luis Potosí nuevamente nombrado, Martín del Pozo. Eran fruto de las gestiones que habían realizado los potosinos de aquella época. Traía también una “instrucción” para gobernarse en calidad de comisionado

en la fundación de la Real Caja. Él mismo envió diligencias jurídicas a España relativas al asunto. De allá vino una nueva cédula dirigida al virrey marqués de Cerralvo. Y, al parecer, Del Pozo, primer tesorero, recibió instrucción de fecha 26 de agosto de 1627.⁵

Como el buen juez por su casa empieza, el primer procesado notable que conocemos por causas de real hacienda, fue el propio tesorero, o sea el mismo distinguido por el rey Martín del Pozo. Tanto por motivos de administración como por el llamado "descamino del oro", u ocultamiento de un gran hallazgo y evasión de los derechos del rey, aparece a los ojos de hoy la codicia de muchos de la sociedad potosina de entonces. Y Martín del Pozo, como primer actor, fue aprehendido en 1632 y puesto en la cárcel.

Los jueces oficiales reales, Juan de la Cueva y Bernardo de Arrazola, le siguieron juicio de "concurso de acreedores", que resolvieron en 1633 con tres "fallos" contrarios y gravosos al primer tesorero, afectando también a Andrés de Ayala, que había sido contador, su compañero y encargado de prenderlo. Por eso resultó Ayala "alguacil alguacilado" y tachado por Martín del Pozo como hombre poseído contra él de "rencor y enemistad".⁶

Sólo este caso bastaría para acreditar que los oficiales reales ejercieron la calidad de jueces en San Luis Potosí. Pero hay más información que lo confirma. Más tarde, en 1656, el tesorero Francisco de Castro y Mampaso se refirió en su testamento a un chichimequillo que le envió el gobernador del Nuevo Reino de León "para que me sirviese conforme a las reales ordenanzas".⁷ Es posible que el tesorero aludiera a las reales cédulas de fundación, pero más importante sería que se tratara de ordenanzas propias.

Pero antes, un acuerdo de la junta de Real Hacienda de México, de principios de 1651, tuvo como efecto la suspensión de la Real Caja de San Luis Potosí "por no ser necesaria". Y, una vez que el alcalde mayor, el castellano (de un castillo) Alonso de Guzmán, recibió la orden, la ejecutó a la media hora siguiente. Los oficiales se resistían a entregar las llaves porque alegaban que:

resultarían las dudas e inconvenientes que en semejantes casos se había previsto, mandando que a la muerte de los oficiales estuvieran

⁵ Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 2, pp. 137-138.

⁶ *Id.*, pp. 154-155.

⁷ Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 1, p. 126.

siempre aparte las llaves, así como que nunca entrara uno de ellos sin el otro y sin el escribano a ejercer su oficio.⁸

Esto es que el régimen jurídico era muy estrecho y previsor en todos sentidos.

Sin embargo, el tesorero de Castro y Mampaso y el contador de Asiain y Vitoria no se arredraron. Entablaron pleito en Madrid por medio de apoderado, comprometiéndose a pagar las costas y gastos a partes iguales.⁹ Y tuvieron éxito, pues en 1653 lograron una real cédula por la que se restablecía la Real Caja de San Luis Potosí.

Con tal motivo, celebraron el traslado de los reales hierros o punzones "con la grandeza y autoridad que se acostumbra en casos semejantes". De todo ello interesa a nuestro asunto que estuvieran en la ceremonia, celebrada en las casas reales, ambos "sentados en su tribunal dichos señores oficiales reales".

Uno de los fundamentos de su ardoroso empeño tenía también su base y explicación jurídica, en tanto que habían comprado sus empleos "en no pequeña cantidad de pesos".¹⁰ Por lo cual aquí se plantea la cuestión de si aquellos cargos eran vendibles o no por régimen jurídico. Lo indudable es que para su ejercicio era primordial el documento fuente o nombramiento que debía emanar precisamente del rey,¹¹ situación equiparable a la de los virreyes, los obispos y los oidores.

El año de 1712 ofrece otro caso notable de aplicación de un proceso jurídico a oficiales reales. El virrey removió a los que tenían el cargo de San Luis Potosí y dio orden al alcalde mayor que en compañía de los alcaldes ordinarios los aprehendiera. Ellos de inmediato la ejecutaron en la persona del tesorero Pedro de Ibarra y el contador Manuel Díaz de Llanos, siendo puestos a buen recaudo en la casa del alférez José de Luna.¹²

Los jueces oficiales reales de San Luis Potosí también tuvieron que ver en cuestiones de carácter social y político, cuyos ecos han llegado a nuestros días con gran estruendo. Para reprimir los famosos tumul-

⁸ Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 2, pp. 188-189.

⁹ Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 1, p. 125.

¹⁰ Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 2, pp. 189, 190.

¹¹ Sánchez Bella, Ismael, *La organización financiera de las Indias (siglo XVI)*, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1968, p. 131. Quien quiera profundizar en el régimen jurídico de los oficiales reales de las Indias Españolas debe consultar esta excelente obra; y otra del mismo Sánchez Bella, "Real Hacienda", *Los Tribunales de la Nueva España*, México, UNAM, 1980.

¹² Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 2, 1982, pp. 320, 321.

tos de 1767, suscitados por diversos problemas sociales y detonados por la expulsión de los jesuitas, el visitador José de Gálvez delegó en varios personajes la facultad de instruir las sumarias a los potosinos tumultuarios. Uno de ellos fue Felipe Cleere, tesorero de la Real Caja,¹³ con que se comprueba más que los oficiales reales tenían práctica judicial.

Entre las reformas administrativas llamadas borbónicas conviene recordar las ordenanzas de intendentes, que reglamentaron la intervención de los nuevos intendentes en asuntos de real hacienda y privaron a los jueces oficiales reales de su "jurisdicción coactiva", punto medular del ser y quehacer del empleo. Ya muy tarde, más de treinta años después, se buscó reparar el error de esta medida radical en el reinado de Fernando VII, pues por real orden dada en 1809 se derogaron los artículos de las citadas ordenanzas para que los ministros de real hacienda y los administradores de aduanas la recuperaran, conforme a la ley 2a., título 3º, libro 8º de la *Recopilación de Indias*.¹⁴

De esta manera comprobamos a grandes rasgos que hubo, de 1628 a 1821, una extensa urdimbre jurídica que propició la actuación en San Luis Potosí de aquellos privilegiados jueces oficiales reales de la Real Caja, sujetos del "fuero de hacienda", quienes "además del cobro, cuidado y aplicación de las rentas, podían perseguir a los deudores del fisco sin necesidad de recurrir a los tribunales".¹⁵ Y que estaban inmersos en un sistema eficaz que a los primeros que sometía a juicio era a los mismos funcionarios que atentaban contra los dineros del rey.

A efecto de acreditar la notable influencia de los jueces oficiales reales en la sociedad potosina, hemos seleccionado a dos, Francisco de Castro y Mampaso del siglo XVII y Felipe Cleere del XVIII.

El capitán de Castro y Mampaso era de Madrid y recibió la Real Caja como tesorero el 24 de septiembre de 1648. Al suspenderse, el Tribunal de Cuentas calificó las suyas favorablemente. Al volver en triunfo con la real cédula de restablecimiento en 1653, trajo a la ciudad una copia al pincel, tocada al original, de la Virgen de Guadalupe de México y comenzó por sí mismo y con ayuda de otros la construcción de un santuario para la imagen. Y al morir en 1656, nombró al-

¹³ *Id.*, p. 534. En la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en Madrid, hemos consultado los voluminosos expedientes de estos tristes juicios.

¹⁴ Ress Jones, Ricardo, *El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España*, 2a. ed., México, UNAM, 1983, pp. 389, 390.

¹⁵ Sánchez Bella, "Real Hacienda...", *op. cit.*, *supra*, nota 11, p. 293.

bacea al contador José de Asaiain y Vitoria y dejó sus bienes por medio de testamento para la obra,¹⁶ que llegó a concluirse y a dar cuerpo sólido al guadalupanismo en San Luis Potosí.

De la actuación de Castro y Mampaso se deduce legítimamente que tenía un exacto y eficaz criterio jurídico, pues nada dejó al azar y sus asuntos los diligenció jurídicamente, pronto y bien. Logró el restablecimiento de la Real Caja y dejó sus bienes por testamento para el santuario de Guadalupe.

Del testamento fluyó también el importante patronato laico —en su sentido primigenio— del ayuntamiento de San Luis Potosí y del párroco de la ciudad sobre el santuario guadalupano, ejercido de hecho sólo por el primero.¹⁷

Textualmente declaró que ni al cabildo y regimiento ni al párroco “se les haya de poner impedimento por ninguna persona eclesiástica ni secular porque así es mi determinada voluntad”.¹⁸ O sea que con criterio jurídico y de laico católico asentó una figura jurídica como más que abundaban en Nueva España y de las que escasean estudios: los patronatos laicos.

De Felipe Cleere se puede hablar mucho en pocas palabras. Fue un hombre capaz en cuestión del manejo de dineros y también legó un rico patrimonio histórico y artístico.

Hacia 1791, siendo intendente de Zacatecas, emitió un dictamen que apoyó, entre otras razones, en sus “conocimientos prácticos adquiridos por su residencia de 31 años en este reino”.¹⁹ En efecto, Cleere llegó de España hacia 1760 —fuera de las excepciones, todos los jueces oficiales reales venían de allá a San Luis— como tesorero de la Real Caja de San Luis Potosí, donde desempeñó las funciones inherentes a su empleo y, dado su gusto por la arquitectura, trazó y construyó el hermoso edificio de la Real Caja, el sobrio de Las Recogidas o cárcel de mujeres y el imponderable santuario de Guadalupe.²⁰

Después de los tumultos de 1767, en cuyos juicios sumarios Cleere tuvo participación, la Virgen de Guadalupe fue jurada patrona de aguas, minas y comercio en 1771. Y al año siguiente se colocó la primera piedra del nuevo santuario. Para la ceremonia, todo el cuerpo

¹⁶ Velázquez, *op. cit.*, *supra* nota 2, pp. 203, 204.

¹⁷ Existen numerosos testimonios en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, *Ayuntamiento de San Luis Potosí*.

¹⁸ Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 1, p. 120. Ahora solamente lo ejerce el cabildo eclesiástico.

¹⁹ Ress Jones, *op. cit.*, *supra*, nota 14, p. 325.

²⁰ Planeamos dar a conocer la vida y obra de Cleere en un estudio especial.

social potosino se puso en movimiento en orden procesional, expresión de las más sustanciales de la vida barroca del San Luis Potosí del virreinato.

Dice un testigo ocular que entre los que iban procesionalmente, marchaba "el más dichoso delineante y director de la obra de este suntuoso templo, el señor don Felipe Cleere, tesorero oficial real por su majestad de la Real Caja, del ramo de bulas, comisario de guerra y de su ejército".²¹

Y como la colegialidad fue una de las características del ejercicio del empleo de los jueces oficiales reales, también en el fomento del guadalupanismo actuaron colegiadamente —recordar que el contador Asiain y Vitoria fue albacea de Castro y Mampaso—, el contador Francisco de Sales Carrillo recibió del ayuntamiento el encargo de colectar las limosnas, reunir los materiales y pagar a los operarios.

Pero durante los veintitrés años que aún tardó la construcción, siguió siendo invadida por los vecinos de la ciudad la casa del señor Carrillo, como antes la del señor Cleere; nunca cesó la gotera de los sábados, copiosa, rica, tanto que completó la suma de ciento veintidós mil cuatrocientos pesos, total costo de la obra, a excepción de las torres, que se hicieron posteriormente.²²

Hay un aspecto del empleo de los jueces oficiales reales que interesa señalar porque no se advierte con facilidad, y porque, para el objeto de nuestro estudio, aparece en algún momento regulado conforme a derecho. Se trata de cierto carácter militar.

En 1645 el marqués de Salvatierra nombró "capitán de la primera compañía de infantería a Juan de San Martín", que fue tesorero²³ y, al parecer, caballero de Santiago;²⁴ Francisco de Castro y Mampaso era capitán y su compañero el contador José de Asiain y Vitoria sargento mayor;²⁵ el contador Juan Manuel de la Escalera, capitán;²⁶ el contador Manuel Díaz de Llanos, caballero de Santiago;²⁷ y Felipe Cleere, tesorero, aparece adornado con el rango de comisario de guerra.²⁸

²¹ Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 2, p. 598.

²² *Id.*, p. 601.

²³ *Id.*, p. 175.

²⁴ Archivo Histórico Nacional de España, Madrid, *Santiago*, expedientillo 3237, noviembre de 1649.

²⁵ Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 1, p. 121.

²⁶ Velázquez, *op. cit.*, *supra*, nota 2, p. 246.

²⁷ *Id.*, p. 321.

²⁸ *Id.*, p. 598.

Efectivamente, la comisaría fue culminación de un carácter que se advierte constante en el empleo de los oficiales reales. A propósito, en 1780 se dio una real orden para que todos los oficiales reales que servían con real título en América usaran el uniforme y bastón de comisario de guerra, y que por estos distintivos y gracias no pagaran media anata. Mas, al lograrse cierta institucionalización del ejército y sobre todo el establecimiento de las intendencias, también por real orden dada en 1786 se mandó que ningún oficial real se intitulara ya comisario de guerra.²⁹

Y los escribanos de San Luis Potosí, como dependientes también de los jueces oficiales reales, se titulaban a fines del siglo XVIII: escribano real público de cabildo real hacienda y guerra.

Muchas razones podrían aducirse para apoyar la idea de que el empleo tenía carácter militar, pero hasta ahora con una sola de sentido común. Los jueces oficiales reales debían ser y estar aptos para defender cuando fuera necesario los dineros del rey con las armas en la mano.

Queda pues así dibujada en parte la figura de los jueces oficiales reales de la Real Caja de San Luis Potosí quienes entre quintos de plata "envuelta en oro", plata labrada, diezmos, bulas de cruzada, papel sellado, sínodos, alcabalas, ensayes, pulques, naipes, azogue y demás, se daban tiempo para influir en la vida social pregonando siempre que actuaban conforme a derecho, y en voz del tesorero José de la Vía Ochoa y el contador Gregorio García de Olloqui, dirigiéndose al rey en 1733, que sólo eran "reverentes hechuras y criados de vuestra majestad".³⁰

La aportación de este trabajo al conocimiento de la historia del derecho en México es muy precisa. Da a conocer una lista de tesoreros y contadores de la Real Caja de San Luis Potosí (1628-1821), que ya no disfrutaron el título de jueces oficiales reales,³¹ aunque de tal modo se les llamaba y se hacían llamar socialmente, pero que en la práctica tuvieron jurisdicción y competencia en materia hacendaria. O sea que ejercieron una de las porciones del poder real de España en San Luis Potosí, en tanto que la división de poderes se daba por materias (gobierno, justicia, guerra, hacienda, etcétera), emanadas todas de su única fuente: el rey; y que gozaron el llamado "fuero de

²⁹ Beleña, Eusebio Buenaventura, *Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España*, México, UNAM, 1981, t. I, p. 267, del 3º y último foliaje, núms. 545 y 546.

³⁰ Martínez Rosales, *op. cit.*, *supra*, nota 4, p. 58.

³¹ Sánchez Bella, 'Real Hacienda...', *op. cit.*, *supra*, nota 11, p. 331.

hacienda" con toda su carga de derechos, obligaciones, privilegios, exenciones, inmunidades y consideración social.

Su importancia radica también en poner a disposición de los interesados la nómina de un cuerpo de funcionarios que en casi dos siglos fueron defensores del real fisco, recio contrafuerte de la vida del imperio español en uno de sus más ricos venarios de metal: San Luis Potosí.

Ambos selectos grupos, tesoreros y contadores, son ahora una clave para la historia regional del derecho en particular y de la real hacienda de Nueva España. Sobre todo porque, teniendo ya un excelente estudio de don Ismael Sánchez Bella que trata del régimen jurídico de los oficiales reales en Indias, hace falta explorar la aplicación del derecho para explicarnos en la realidad la naturaleza y fines de sus empleos, conocer la dimensión humana de sus poseedores en relación con el patrón o modelo jurídico y calar su influencia en una sociedad entonces en formación como la mexicana, concretamente la potosina.

Todo parte de uno de los aspectos jurídicos más sensibles de la monarquía española, es decir su "nervio y músculos" —en palabras de Gaspar de Escalona y Agüero—³² o la materia de hacienda.

De la exposición y del resumen pueden deducirse las siguientes conclusiones: 1) La nómina de los jueces oficiales reales de la Real Caja de San Luis Potosí es una pieza clave de la historia regional, de la historia económica, de la artística y otras de México; 2) El establecimiento y desarrollo vital de la Real Caja de San Luis Potosí tuvo siempre un sólido apoyo jurídico, que llegó a aplicarse a los mismos oficiales reales; 3) Los oficiales reales de la Real Caja de San Luis Potosí fueron auténticos jueces; 4) Los oficiales reales destacaron notablemente en la vida social potosina y de México, lo cual se verifica en su determinante actuación para fomentar el guadalupanismo en San Luis Potosí; y 5) Se advierte en el ejercicio del empleo cierto carácter militar.

Los Jueces Oficiales de la Real Caja de San Luis Potosí

Tesoreros

Siglo XVII: Martín del Pozo, Francisco Ramírez, Bernardo de Arrazola, Luis Cortés, Domingo o Diego de Sagardoi, Luis Remon y

³² Rossell, Cecilia, *Cartascuentas. La Real Hacienda en Nueva España: 1557*, México, CIESAS-SEP, 1984, p. 60.

Avengosar, Gaspar de Arcaya, Juan de San Martín Vértiz, Francisco de Castro y Mampaso, Francisco Díez del Campo, Juan Fernández de Chavida, Juan de Urreta y Zugarrondo, Tomás López Rendón, Gregorio López de Ayala, José de los Santos, José de Echagoyan, Antonio Vélez de la Torre.

Siglo XVIII: Pedro Ibarra y Saldúa, Julián Antonio de Mendoza, Francisco Antonio de Albéniz, Juan Antonio de Palacio, Gregorio García de Olloqui, José Taberne, Miguel de Camaño, Esteban de la Carrera, Felipe Cleere, Miguel Carlos Bustillo, Cristóbal Corbalán.

Siglo XIX: José María Bayos.

Contadores

Siglo XVII: Francisco Pérez de Montoria, Andrés de Ayala, Juan de la Cueva, José de Asiain y Vitoria, Lorenzo Bernardo de Quirós, Juan Manuel de la Escalera, Ventura de Paz, Juan de Munarriz, Pedro Ibarra y Saldúa.

Siglo XVIII: Manuel Díaz de Llanos, Juan Antonio de Somoza y Torres, Francisco Antonio de Lozada y Quiroga, José Agustín de Bustillo, José de la Via Ochoa, Fernando Manuel Monroy, Francisco de Sales Carrillo, Juan Banfi, Francisco Manuel de Arce.

Siglo XIX: José Caballero Basave, Pedro López.

BIBLIOGRAFÍA

BELEÑA, Eusebio Buenaventura, *Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España*, México, UNAM, 1981, t. I. Prólogo de María del Refugio González.

MARTÍNEZ ROSALES, Alfonso, "Los comisarios de la inquisición en la ciudad de San Luis Potosí, 1621-1820", en *Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano (1983)*, México, UNAM, 1984; *El gran teatro de un pequeño mundo. El Carmen de San Luis Potosí, 1732-1859*, México, El Colegio de México-Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1985.

RESS JONES, Ricardo, *El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España*, 2a. ed., México, UNAM, 1983.

Fuentes: Archivo de Simancas, *Titulos de Indias*, Valladolid, España [Archivo de la Corona de Castilla]; Archivo General de Indias, México, Guadalajara, *Contaduría*, Sevilla; Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, *protocolos*.

- ROSSEL, Cecilia, *Cartascuentas. La Real Hacienda en Nueva España: 1557*, México, CIESAS-SEP, 1984.
- SÁNCHEZ BELLA, Ismael, *La organización financiera de las Indias (siglo XVI)*, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1968; "Real Hacienda", en *Los tribunales de la Nueva España*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980.
- VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, *Historia de San Luis Potosí*, vol. II, San Luis Potosí, Academia de la Historia Potosina, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1982, vol. II; *Colección de documentos para la historia de San Luis*, vol. II, San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1987, vol. II.